



Consejo de
Transparencia y
Buen Gobierno

PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN

N/REF: RT/0113/2017

FECHA: 28 de septiembre de 2017

ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

En respuesta a la Reclamación número RT/0113/2017 presentada por [REDACTED], el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente **RESOLUCIÓN**:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante escrito registrado el 11 de enero de 2017 en la Dirección General de Servicios y Atención a la Ciudadanía del Gobierno de Cantabria, el ahora reclamante, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno -desde ahora, LTAIBG- planteó una solicitud de acceso a la información relacionada con las siguientes cuestiones:

- a) *Relación de gastos atendidos con Anticipos de Caja Fija, la identificación del objeto origen del gasto y se constate el importe pagado y el acreedor de los mismos desde el año 2010 hasta el año 2016 por el titular del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, organismo autónomo dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, cuya gestión ha sido atribuida al ICASST mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de 14 de enero de 2010.*

ctbg@consejodetransparencia.es



- b) *Expresión de la cuantía global de los anticipos de caja fija concedidos y porcentaje del total de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto vigente de cada anualidad referida.*
- c) *Las cuentas justificativas aprobadas por el director del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo referentes a los gastos referidos anteriormente.*

Tras ampliar el plazo para dictar resolución en los términos del artículo 20 de la LTAIBG, mediante Resolución de 17 de marzo de 2017 del Director General del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud se contesta al ahora reclamante en el siguiente sentido:

- Se trasladan relaciones de gastos atendidos por anticipos de caja fija, así como cuentas justificativas, anonimizadas y disociada toda la información relativa a datos de carácter personal conforme a la LTAIBG y los criterios interpretativos de este Consejo.
- Se facilita el porcentaje que constituyen dichos gastos con relación al total de los créditos destinados a gastos corrientes de bienes y servicios del presupuesto de cada anualidad requerida (2010 a 2016).
- Con relación a las cuentas justificativas correspondientes a la habilitación del Instituto se pone de manifiesto que *han sido informadas favorablemente por la Intervención Delegada, teniendo en cuenta los extremos que exige la normativa de aplicación, y que son: 1.- Facturas debidamente cumplimentadas, sin errores aritméticos y justificativas de gastos tramitados adecuadamente. 2.- Los gastos justificados se corresponden a los "corrientes en bienes y servicios", y están correctamente imputados. 3.- Los gastos no superan los límites establecidos, ni contienen acumulaciones ni fraccionamientos, tal y como exige el art. 76.3 Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria.* En este sentido, se facilita un cuadro en el que figura, para cada anualidad presupuestaria, el importe total del Capítulo 2 y la cuantía global de anticipos de caja fija (10%).
- Finalmente, se facilita copia de las distintas órdenes anuales por las que se regulan los pagos satisfechos mediante anticipos de caja fija.

Mediante escrito registrado en esta Institución el 31 de marzo de 2017, el interesado plantea una reclamación al amparo del artículo 24 de la LTAIBG frente a la Resolución de 17 de marzo de 2017 del Director General del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud. En concreto, los motivos en que funda su pretensión son los siguientes:

- *Se contesta a la solicitud de gastos atendidos mediante anticipos de caja fija con una lista de todos ellos agrupados por año pero sin determinar la fecha en que estos fueron hechos lo que dificulta el manejo y análisis de la documentación.*
- *En cuanto a la cuantía global de los mismos y el porcentaje que constituyen del total de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes, la información ofrecida en el escrito del Director del ICASST, en contraste con lo dispuesto*



en las distintas ordenes anuales de la consejería de economía en las que se establecen las normas que regulan dichos pagos y que establece que estos no superaran el 10% de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes, fijándose la cantidad máxima mediante anexo a dichas ordenes, pone de manifiesto que en todas la anualidades desde 2010 a 2016 se supera dicho porcentaje, llegándose este a casi a doblar en muchos de los casos. Lo cual choca frontalmente con los principios de buen gobierno.

- *En cuanto a las cuentas justificativas aprobadas por el director del ICASST, a propuesta del habilitado correspondiente según fijan las ordenes referidas anteriormente en su artículo 5, estas no se me han enviado.*

2. A través de sendos escritos de 3 de abril de 2017 por la Oficina de Reclamaciones de las Administraciones Territoriales de este Consejo se dio traslado del expediente, por una parte, a la Dirección General de Servicios y Atención a la Ciudadanía de la Consejería de Presidencia y Justicia de Cantabria para conocimiento y, por otra parte, a la Secretaria General de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria a fin de que, en el plazo de quince días hábiles, se formularan las alegaciones que se estimasen convenientes, aportando, asimismo, toda la documentación en la que fundamentar las alegaciones que pudieran realizarse.

Por escrito del Director General del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo registrado en esta Institución el 24 de abril de 2017 se trasladan las siguientes consideraciones:

- En relación a la primera de las cuestiones, se ha facilitado al solicitante lo que textualmente pidió -"relación de gastos atendidos con anticipos de caja fija, la identificación del objeto origen del gasto, importe pagado y el acreedor de los mismos desde el año 2010 a 2016"- en su escrito de fecha 11 de enero de 2017.
- En cuanto a la segunda de las reclamaciones planteada, más que una reclamación a la documentación aportada se trata de una afirmación errónea que no se ajusta a la normativa aplicable al sistema de anticipos de caja fija, -artículo 76 de la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria-. Estas provisiones tienen el carácter de renovables, tal y como señala el artículo mencionado, por el importe justificado (reposición de fondos), de forma que la cantidad librada (10% CAP.II) permanezca fija a lo largo del ejercicio. Extremo éste que se explica de forma correcta en el escrito del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo de fecha 17 de marzo de 2017. El 10% no es un límite a la cantidad que se puede gastar e imputar al Capítulo II del presupuesto vigente en cada momento, sino que es la cuantía global de carácter renovable por el importe justificado que se tramita a través del sistema de anticipo de caja fija.
- La última de las cuestiones que se reclaman es la relativa a que no se han enviado las cuentas justificativas aprobadas por el Director del ICASST, a propuesta del habilitado correspondiente. En cuanto a este extremo se indica al solicitante en el escrito de fecha 17 de marzo de 2017, que se ha procedido



a anonimizar y disociar toda la información relativa a datos de carácter personal, conforme dispone la LTAIBG y de acuerdo a los criterios interpretativos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (DNI, firmas manuscritas, nombre y apellidos, número de cuentas bancarias...).

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con su artículo 38.2.c) y el artículo 8.2.d) del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Presidenta de este organismo es competente para resolver, con carácter potestativo y previo a un eventual recurso contencioso-administrativo, las reclamaciones que se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información.
2. A tenor del artículo 24.6 de la LTAIBG, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene competencia para conocer de las reclamaciones que regula dicho precepto *“salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley”*. Tal disposición prevé en sus apartados 1 y 2 lo siguiente:

“1. La resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. (...).

2. Las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias”.

En desarrollo de las anteriores previsiones normativas el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Comunidad Autónoma de Cantabria (Consejería de Presidencia y Justicia) han suscrito un Convenio para el traslado a este Consejo del ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el citado artículo 24 LTAIBG en los supuestos de resoluciones dictadas por aquella Administración Autonómica y por las Entidades Locales incluidas en su ámbito territorial, así como por los entes, organismos y entidades integrados en el sector público autonómico o local.





3. Tal y como se desprende de la originaria solicitud de acceso a la información, en el presente caso existen tres cuestiones controvertidas que han motivado la presente reclamación. De este modo, siguiendo el mismo orden que el señalado en aquella solicitud la primera cuestión en la que debemos detenernos consiste en la relativa a la obtención de la “relación de gastos atendidos con anticipos de caja fija” -letra a)-.

En este sentido, cabe señalar que en el seno del Título I de la LTAIBG, relativo a la “Transparencia de la actividad pública”, su Capítulo III aborda la regulación del “derecho de acceso a la información pública”, desarrollando su sección 2ª - rubricada, precisamente, “Ejercicio del derecho de acceso a la información pública”- los elementos esenciales del procedimiento administrativo del ejercicio del reiterado derecho. De este modo, su artículo 17.2.b) dispone que la solicitudes de acceso a la información podrán presentarse por cualquier medio que permita tener constancia, entre otros extremos de “la información que se solicita”. En un sentido similar se manifiesta el artículo 66.1.c) de la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que, al regular las solicitudes de incoación del procedimiento por los interesados, señala que las mismas deben contener, entre otros aspectos, los “hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud”.

En el caso que nos ocupa, la originaria solicitud de acceso a la información, según se desprende de los antecedentes obrantes en el expediente, señala expresamente que su objeto consiste en obtener una “relación de gastos atendidos con anticipos de caja fija, la identificación del objeto origen del gasto y se constate el importe pagado y el acreedor de los mismos desde el año 2010 hasta el año 2016 [...]”. De modo que en la información suministrada por el Instituto de referencia figura, según se desprende de la documentación aportada en el expediente, los siguientes elementos para cada anualidad presupuestaria: la relación de beneficiarios de los anticipos de caja fija, el importe, la descripción del gasto realizado. Por ello, en definitiva, no cabe formular reproche alguno a la actuación de la administración autonómica en cuanto a la contestación facilitada al solicitante de información desde el momento en que su actuación se ha ceñido, estrictamente, a facilitar la información pretendida por el ahora reclamante en la originaria solicitud de acceso a la información.

Procede, en consecuencia, desestimar la Reclamación en este aspecto concreto.

4. En cuanto a la segunda de las cuestiones que han motivado esta Reclamación, debemos partir, para su examen, de precisar cuál es el objeto del procedimiento del derecho de acceso a la información. En este sentido, cabe recordar que el artículo 12 de la LTAIBG reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la “información pública” en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución y desarrollados por dicha norma legal. Por su parte, en el artículo 13 de la LTAIBG se define la “información pública” como





“los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”.

A tenor de los preceptos mencionados cabe sostener que el concepto de información pública que recoge la Ley, en función del cual puede presentarse una solicitud de acceso, se refiere a información de la que disponga un organismo o entidad de los sujetos a la Ley en el momento en que se produce la solicitud. Y ello, para garantizar el objetivo que persigue la norma que no es otro que “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad” -artículo 1 de la LTAIBG-. Para garantizar el ejercicio de este derecho, finalmente, el legislador ha arbitrado una garantía adicional, previa a acudir al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, a través de la reclamación regulada en el artículo 24 de la LTAIBG cuyo conocimiento se atribuye a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Si atendemos a la fundamentación del motivo de oposición de esta segunda cuestión -en todas las anualidades, según indica el reclamante, se supera el porcentaje del 10 % de los anticipos de caja fija- se aprecia que estamos en presencia de una materia ajena al objeto concreto y específico tanto de las solicitudes de acceso a la información como de la reclamación del artículo 24 de la LTAIBG. En caso de apreciar una controversia en la materia señalada, en el vigente ordenamiento jurídico existen vías para manifestar el desacuerdo a las que puede acudir el ahora reclamante.

Siguiendo el criterio fijado en anteriores Resoluciones -entre otras, las números R/0118/2016, de 22 de junio, RT/0112/2016 y RT/0134/2016, de 30 de septiembre-, procede desestimar la reclamación presentada con relación a este aspecto concreto.

5. Finalmente, en cuanto respecta a la tercera de las cuestiones suscitadas en esta Reclamación, por el reclamante se ha indicado que no se ha facilitado las cuentas justificativas aprobadas por el Director del ICASST. Por su parte, la administración autonómica indica que se ha facilitado la información tras proceder a anonimizar y disociar toda la información relativa a datos de carácter personal conforme a la LTAIBG y a los criterios interpretativos del propio Consejo (DNI, firmas manuscritas, nombre y apellidos, número de cuentas bancarias. En efecto, tal y como figura en el punto 2º de la Resolución de 17 de marzo de 2017 del Director general del ICASST, “En las relaciones adjuntas de gastos atendidos por anticipos de caja fija, así como cuentas justificativas, se ha procedido a anonimizar y disociar toda la información relativa a datos de carácter personal [...]”.

Con carácter general, cabe advertir que en la cuenta justificativa de los anticipos de caja fija figurarán las facturas o documentos sustitutivos correspondientes a estos gastos, así como la justificación de su pago. Ello implica que tales documentos contendrán datos personales de personas físicas susceptibles de



protección en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. De este modo, al igual que sucedía con la primera de las cuestiones planteadas en esta Reclamación, no cabe formular reproche a la administración autonómica cuando traslada la información solicitada previa disociación de datos de carácter personal en los términos de lo previsto en el artículo 15 de la LTAIBG.

Procede, en suma, desestimar la Reclamación en este aspecto concreto.

III. RESOLUCIÓN

En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede **DESESTIMAR** la reclamación presentada frente a la Resolución de 17 de marzo de 2017 del Director General del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud al considerar que se ha realizado una aplicación correcta de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

LA PRESIDENTA DEL
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
Esther Arizmendi Gutiérrez

